

Santiago, veintinueve de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En causa RUC N°2200128773-0, RIT 56-2023 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, por sentencia de uno de abril del año dos mil veinticuatro, se condenó al acusado **Esteban Ignacio Henríquez Riquelme**, a la pena única de **cuatro años** de presidio menor en su grado máximo, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos por el tiempo de la condena y costas de la causa, como autor de los delitos consumados de **porte ilegal de armas de fuego**, previsto y sancionado en el artículo 9 inciso primero de la Ley N°17.798 y de **porte ilegal de municiones**, previsto y sancionado en el artículo 9 inciso segundo, del mismo estatuto jurídico, por hechos ocurridos el siete de febrero de dos mil veintidós, en la comuna de Traiguén.

En contra de la decisión condenatoria el sentenciado interpuso recurso de nulidad, el que fue conocido en audiencia pública celebrada el día nueve de mayo del año en curso, notificándose a los intervinientes la fecha de lectura del fallo para el día fijado, según consta en el acta levantada en su oportunidad.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la defensa del encartado invocó como motivo principal de nulidad, aquel previsto en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 85 del citado estatuto jurídico y artículo 19 N°3 inciso sexto de la Constitución Política de la República. Es así como el imputado alega vulnerado su derecho a ser juzgado dentro de un proceso racional y justo, centrando la objeción en la adopción de un procedimiento policial reñido con la ley



a causa del despliegue de un control de identidad investigativo desprovisto del indicio necesario para su implementación.

En subsidio, el sentenciado promovió el motivo de invalidez previsto en el artículo 373 letra b) del código adjetivo, fundando la infracción de ley en la improcedencia de haber sido condenado en costas de la causa.

SEGUNDO: Que, la objeción principal se apoyó en la adopción de un procedimiento policial desprovisto del indicio necesario para ejecutar un control de identidad investigativo, toda vez que el consumo de alcohol en la vía pública no califica como una falta con incidencia penal, sino que únicamente atingente al plano administrativo al circunscribirse a la Ley N°19.925.

Asimismo, agregó que incluso bajo el contexto de un control de identidad preventivo no correspondía que la policía hubiese hecho registro del bolso que traía consigo el inculpado, dado que dicha prerrogativa solo puede ejercerse en los casos avalados expresamente por el legislador, como acontece, por ejemplo, con la Ley N°18.290, estatuto jurídico no aplicable al caso en examen.

En razón de lo anterior, el impugnante solicitó acoger la causal primordial de nulidad entablada, anulando tanto la sentencia atacada como el juicio oral que le precedió, ordenando la celebración de un nuevo juicio oral con prescindencia de toda la prueba ofrecida en el auto de apertura de juicio oral.

TERCERO: Que, como cuestión preliminar, es menester señalar que la sentencia atacada dio por establecido el siguiente sustrato fáctico:

“El día 07 de Febrero del año 2022, alrededor de las 22.30 horas, el imputado Esteban Ignacio Henríquez Riquelme, fue sorprendido por funcionarios de la Policía de Investigaciones en la Plaza de Armas de la comuna de Lumaco, ubicada en calle Carlos Condell con Aníbal Pinto, manteniendo en su poder un bolso marca Head color rojo con negro, en cuyo interior se encontraban, entre



otras, las siguientes especies: Una escopeta, calibre 12, marca Rossi, de un cañón, número de serie S917736; 32 cartuchos, de los cuales 24 de ellos corresponden a cartuchos calibre 12, marca GB con la leyenda "Competición N°5" de color naranja y 8 cartuchos calibre 12, marca Tec con la leyenda "Extra Tram" N° 5 color azul. El acusado no registra armas inscritas a su nombre, ni permiso o autorización para portar o tener armas o municiones".

El hecho recién descrito fue calificado por el *a quo* como constitutivo tanto de un delito consumado de porte ilegal de arma de fuego como también de porte ilegal de municiones, previstos y sancionados en los artículos 9 inciso primero y segundo en relación con el artículo 2, ambos de la Ley 17.798.

CUARTO: Que, para un adecuado análisis de la protesta levantada, es recomendable traer a colación ciertos lineamientos que esta Corte Suprema ha fijado sobre la temática en estudio. Es así, como se ha sostenido en diversos pronunciamientos que si bien es efectivo que la Constitución Política de la República entrega al Ministerio Público la función de dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, regla que repite su Ley Orgánica Constitucional y múltiples instrucciones de parte de la autoridad superior de aquél, el Código Procesal Penal regula las funciones de la policía con relación a la investigación de hechos punibles y le entrega cierto nivel de autonomía para desarrollar actuaciones que tiendan al éxito de la investigación, conciliando su eficacia con el respeto a los derechos de las personas.

QUINTO: Que, también se ha declarado sistemáticamente que, más allá de la adscripción o no que tenga esta Corte en torno a la puesta en marcha del control de identidad, el aspecto trascendental a despejar estriba en constatar la correcta construcción del indicio a partir de las circunstancias objetivas que arroja el caso concreto. Sólo así, se justificará razonablemente la temporal restricción de



la libertad personal de un ciudadano que es sometido a tal actuación y, con ello, descartar el uso arbitrario, antojadizo o discriminatorio de esta herramienta legal.

SEXTO: Que, zanjado lo anterior, es menester decir que en el considerando décimo tercero de la sentencia recurrida los jueces del fondo expresaron los motivos tenidos en vista para rechazar la alegación asociada a la adopción de un procedimiento policial desapegado a la ley.

En ese sentido, lo primero que debe remarcarse trasunta en que el principal argumento judicial para validar el actuar policial no fue precisamente la situación de consumo de alcohol del inculpado en la vía pública, como lo propone la defensa. En efecto, la primera reflexión que el *a quo* internalizó para rechazar un proceder policial ilegal fue que a la fecha de perpetrado el hecho, esto es al siete de febrero de dos mil veintidós, se encontraba vigente el Decreto Supremo N°21 del Ministerio del Interior, que extendió hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintidós la vigencia del Decreto Supremo N°295 de la misma cartera, regulación esta última asociada a la declaración de estado de excepción constitucional por causa del virus COVID-19. Así, los aludidos decretos supremos autorizaron a las Fuerzas de Orden y Seguridad para efectuar controles a las personas que se hallaren en la vía pública precisamente para velar por el adecuado cumplimiento a las restricciones de desplazamiento impuestas por el Estado.

En ese escenario, los agentes policiales que participaron en la aprehensión del enjuiciado, cuyo testimonio se consigna en el basamento sexto del fallo en revisión, indicaron que el día de los hechos, en plena vigencia del estado de excepción constitucional por COVID-19, a eso de las 22:30 horas, observaron a dos sujetos bebiendo alcohol en la plaza de armas de Lumaco, por lo que decidieron implementar un control de identidad conforme a lo dispuesto en el artículo 85 del Código Procesal Penal.



Entonces, es dable precisar que la temática asociada al quebrantamiento de la normativa asociada al estado de excepción constitucional vigente emergió como el elemento inicial que alentó a los funcionarios a controlar al encartado y, a la vez, emergió como el primer antecedente recogido por los jueces de la instancia para desechar el planteamiento relativo a la ejecución de un procedimiento policial ilegal. Por lo mismo, resulta imperioso dilucidar primeramente si tal circunstancia habilitaba a la policía para desplegar un control de identidad investigativo y, sólo para el caso de arribar a una respuesta negativa frente a tal hipótesis, adentrarse a analizar a continuación si el reclamo que subyace tras el arbitrio de invalidez incoado, esto es, si el consumo de alcohol en una plaza pública constituye o no una falta de aquellas que posibiliten la ejecución de la facultad autónoma prevista en el artículo 85 del Código Procesal Penal.

SEPTIMO: Que, en esa ilación, es necesario resaltar que, a la fecha de comisión de los ilícitos que motivaron la condena, estaba vigente el artículo 318 del Código Penal, disposición, cuyo inciso primero, prescribía que: *“El que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio o multa de seis a doscientas unidades tributarias mensuales”*.

Como se advierte, la norma transcrita regulaba una conducta atribuible a un simple delito, consistente en poner en riesgo la salud pública en un determinado escenario contextual. Pues bien, cabe decir que la acción objetiva en la que fue sorprendido el inculpado, esto es bebiendo alcohol junto con otra persona, unido al lugar y la hora en el que lo hacía y principalmente bajo el imperio de un estado constitucional de excepción en vigor a raíz del fenómeno pandémico causado por el virus COVID-19, emergen como un cúmulo de antecedentes objetivos que



permitieron a los agentes policiales representarse un fundado indicio de estar cometándose un simple delito.

Es por ello que, lícitamente se realizó un control de identidad conforme al artículo 85 del Código Procesal Penal, diligencia que facultaba a la policía para registrar el bolso que el imputado traía consigo, instante en que observaron la escopeta y cartuchos incautados, mutando en ese preciso momento el control de identidad en una detención por flagrancia por infracción a la Ley N°17798.

Habida consideración de lo indicado, resulta inoficioso detenerse a analizar si el consumo de alcohol en la vía pública constituye o no una falta con trascendencia penal, al quedar clarificada la licitud con que obraron los funcionarios policiales.

OCTAVO: Que, en suma, una vez analizados los antecedentes, elementos objetivos y motivos que condujeron a la policía a adoptar válidamente un control de identidad investigativo y subsecuente registro del bolso e incautación de especies, sólo queda desestimar el cuestionamiento principal de invalidez promovido por el recurrente.

NOVENO: Que, en lo tocante a la causal subsidiaria prevista en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, es menester consignar que la infracción de ley denunciada por el recurrente se apoyó en el hecho que la sentencia impugnada lo condenó a soportar el pago de las costas de la causa, en circunstancias que no procedía tal determinación al gozar de privilegio de pobreza.

DÉCIMO: Que, esta segunda protesta deberá ser rechazada por cuanto el recurso de nulidad corresponde a un medio de impugnación extraordinario destinado a atacar exclusivamente una categoría especial de resolución judicial, a saber, la “sentencia definitiva”. Aún más, tampoco procede en contra de todas las sentencias definitivas que se dicten en el contexto del proceso penal regido por el



Código Procesal Penal, sino que sólo respecto de aquellas que expresamente la ley lo autoriza de acuerdo con la naturaleza del procedimiento sustanciado.

Refuerza la idea señalada, lo prescrito en el artículo 372 del Código Procesal Penal, en cuanto dispone que: *“El recurso de nulidad se concede para invalidar el juicio oral total o parcialmente junto con la sentencia definitiva, o sólo esta última, según corresponda, por las causales expresamente señaladas en la ley”*.

Con todo, en el caso *sub lite*, a pesar de que la resolución impugnada fue pronunciada por un Tribunal de Juicio Oral en lo Penal en el contexto de un procedimiento ordinario por delito de acción penal pública, no es menos cierto que aquélla contiene distintos pronunciamientos en su parte dispositiva, escapando algunos de los contornos que identifican una “sentencia definitiva”, fenómeno conocido como el de la *integración de las sentencias*, consistente en la posibilidad de que una sentencia judicial contenga decisiones de naturaleza jurídica diversa.

Así, la determinación relativa a la imposición de costas no se vincula a la citada categoría de resolución judicial, precisamente por carecer de conexión e incidencia con la definición acerca de la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio, teniendo en cambio la naturaleza jurídica de una sentencia interlocutoria. De ahí entonces que, a la luz de lo expuesto precedentemente, resulta improcedente valerse del recurso de nulidad para impugnar una decisión que no encuadra jurídicamente como “sentencia definitiva”, razón que conducirá a desestimar la causal subsidiaria levantada por el sentenciado.

Empero, cabe manifestar que todo lo dicho previamente es sin perjuicio de las atribuciones que el ordenamiento jurídico confiere a esta Corte Suprema para actuar oficiosamente respecto de aquellos pronunciamientos de naturaleza



jurídica diversa a una sentencia definitiva, las que serán ejercidas en la forma que se dirá en lo dispositivo de este fallo.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en los artículos 83, 85 y 342, 373 letra a) y 374 letra e), todos del Código Procesal Penal, **SE RECHAZA** el recurso de nulidad promovido por la defensa de **Esteban Ignacio Henríquez Riquelme**, en contra de la sentencia de uno de abril del año dos mil veinticuatro, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, en la causa RUC N°2200128773-0, RIT 56-2023, y del juicio oral que le antecedió, los que, por consiguiente, no son nulos.

Sin perjuicio de lo anterior y en virtud de las facultades oficiosas que el procedimiento penal entrega a esta Corte Suprema, en función de la conjugación de los artículos 47 y 52 del Código Procesal Penal en relación con los artículos, 83, 130 y siguientes y 144, todos del Código de Procedimiento Civil y artículos 593 y 600 inciso 3, ambos del Código Orgánico de Tribunales, **se deja sin efecto** la decisión plasmada en el **ordinal cuarto resolutivo** de la sentencia definitiva individualizada, disponiéndose en su lugar que el sentenciado **queda exento de soportar las costas de la causa** por litigar con privilegio de pobreza y, además, encontrarse privado de libertad con motivo de esta causa.

Se previene que el Ministro Sr. Llanos, concurrió al rechazo del recurso de nulidad intentado a favor de Esteban Ignacio Henríquez Riquelme, únicamente en base a las siguientes consideraciones:

1°) Que, al no haberse elevado objeción de invalidez alguna relativa al establecimiento del sustrato fáctico fijado por el tribunal de la instancia, es necesario estarse a los mismos al instante de analizar la causal de nulidad entablada en lo principal del recurso.



2°) Que, en ese contexto, resultó ser un hecho de la causa que el acusado fue sorprendido consumiendo alcohol junto a un tercero en la plaza de armas de Lumaco, estando vigente el Decreto Supremo N°21 del Ministerio del Interior, que prorrogó la vigencia del estado de excepción constitucional por COVID-19, hasta el 28 de febrero de 2022.

3°) Que, en ese escenario, la conducta en que la que fue observado el encausado habilitaba a la policía para proceder a su detención en flagrancia conforme lo dispuesto en el artículo 130 letra a) del Código Procesal Penal en relación con el artículo 318 del Código Penal, bajo su redacción a la época de los hechos.

4°) Que, como consecuencia de la válida aprehensión del imputado, la policía se encontraba en posición de registrar el bolso que aquél portaba, instante en el que se produjo casualmente el hallazgo de la evidencia relacionada con la Ley N°17.798 por la que, en definitiva, resultó condenado. Lo anterior, en atención a que, con ocasión de la comisión flagrante de lo que a dicha época constituía un simple delito, de forma imprevista y enteramente fortuita -a causa de los efectos posteriores derivados de una detención practicada conforme a la ley- los agentes policiales se impusieron de un nuevo ilícito, totalmente desconectado del primero.

5°) Que, como corolario a lo expuesto, la obtención e incautación de la evidencia asociada a la Ley N°17.798, no se vio teñida de ilicitud alguna, toda vez que el antecedente que justificó el registro y hallazgo de la escopeta y cartuchos incriminados fue la adopción de un proceso de detención previo y apegado a la ley.

Redacción del fallo a cargo de la abogada integrante Sra. Tavorari.

Regístrese y devuélvase.

Rol N°13959-2024



Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Manuel Antonio Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos M., Sra. María Teresa Letelier R., y Abogados Integrantes Sra. Pía Tavorari G., y Sr. Eduardo Gandulfo R. No firma la Ministra Sra. Letelier, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por estar con permiso. Santiago, 29 de mayo de 2025.



En Santiago, a veintinueve de mayo de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

